



Senadores creen que cierre de Chilolac tendrá efectos en todo el sector pecuario de la provincia

Kuschel mencionó que también hay problemas en el rubro de la carne, Espinoza cuestionó la legalidad de las causales que esgrime la lechera para los despidos y Moreira estima que el Estado debe auxiliar a las empresas de Chiloé.

Carolina Ruiz Díaz
 cronica@laestrellachiloe.cl

Las reacciones políticas se extienden tras el cierre de la emblemática empresa formalmente llamada Sociedad Agrolácteos Chiloé S. A., más conocida por su marca Chilolac, situación que hasta ahora ha significado la notificación de despido de 110 trabajadores, generando un profundo impacto laboral y productivo en la provincia de Chiloé, particularmente en la comuna de Ancud.

Una de las situaciones que más inquietud ha generado entre los trabajadores es que las desvinculaciones se han efectuado bajo el artículo 159 del Código del Trabajo, en sus numerales 5 y 6 (fin de labores o servicios y fuerza mayor, respectivamente), lo que implica que los trabajadores no tendrían derecho a indemnización por años de servicio.

Este escenario ha motivado una serie de reuniones con autoridades y organis-

“No he podido conversar con los ejecutivos, la gente con la que he hablado ya no trabaja en la empresa, entonces es un escenario muy complejo el que estamos viendo”.

Carlos Ignacio Kuschel,
 parlamentario por la zona.



LA PLANTA DE LA FIRMA ANCUDITANA SE UBICA EN EL SECTOR DE PUDETO BAJO, A UN COSTADO DE LA PANAMERICANA.

mos competentes, con el objetivo de analizar alternativas de apoyo, orientación legal y eventuales medidas de mitigación para quienes quedaron sin su fuente laboral.

Hasta el cierre de la edición, Chilolac no se pronunció oficialmente respecto al futuro de la compañía. No obstante, desde el área comercial se informó el lunes la continuación de dos puntos de ventas ubicados en Ancud, sin que ello implique claridad sobre la continuidad del proceso productivo.

Según estimaciones preliminares del sindicato, el monto global de los finiquitos alcanzaría aproximadamente los mil 200 millones de pesos, en un contexto que los propios trabajadores vinculan a la compleja situación financiera de la firma de la familia Becker Álvarez, sin descartar la eventual presentación de acciones legales ante tribunales.

Desde el ámbito parlamentario, los senadores de la Región de Los Lagos han manifestado preocupación transversal por el impacto social y económico del cierre de la lechera.

El senador Carlos Ignacio Kuschel (RN) contó que ha entablado conversaciones y gestiones para buscar alternativas para poder mitigar la crisis, aunque reconoció la falta de información concreta.

“Lo que pasa es ver cuáles son las opciones para los trabajadores, los productores y la producción. He estado viendo en algunos lados, pero en algunos casos no he podido conversar con los ejecutivos, la gente con la que he hablado ya no trabaja en la empresa, entonces es un escenario muy complejo el que estamos viendo”, reconoció.

EVENTUAL ACOPIO

El congresista planteó además la posibilidad de reconvertir algunas instalaciones de Chilolac en un centro de acopio de leche, explorando la opción de que otras compañías puedan absorber parte de la producción y del empleo. “Otra situación que también me preocupa es que en Chiloé hoy no hay matadero autorizado, entonces en estos momentos estamos mal en la producción lechera y también en la producción de carne”, ad-

“Hay que ver cómo se ayuda a los productores de leche, que son tremendamente gravitantes y que van a quedar sin una empresa que les pueda adquirir ese vital elemento”.

Senador Fidel Espinoza.

virtió, subrayando la fragilidad del sistema productivo insular.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS) enfatizó el impacto humano del cese de la lechera. “Cuando una empresa como Chilolac cierra, hay detrás cientos de familias que pierden su empleo y que fueron parte de la historia de una industria ligada a la agricultura familiar campesina”, mencionó, junto con recalcar la necesidad de un rol más activo del

Estado, tanto en planes de reconversión laboral como en asesoría jurídica para los trabajadores.

A juicio del parlamentario, existirían dudas sobre la legalidad de las desvinculaciones. “Creemos que muchos de los finiquitos no se ajustan estrictamente a la legalidad y eso va a implicar que estas familias requieran apoyo. Hay que ver cómo se ayuda a los productores de leche, que son tremendamente gravitantes y que van a quedar sin una empresa que les pueda adquirir ese vital elemento como lo es la leche que diariamente sacan de sus vacas”, señaló Espinoza.

POR MAYOR INVERSIÓN

En tanto, Iván Moreira (UDI), en recientes declaraciones a Radio Bío-Bío, calificó el cierre como una pérdida “lamentablemente irreversible”, reparando que afectará no solo a trabajadores, sino también a productores y al desarrollo económico de la provincia.

En ese sentido, el representante local en el Senado enfatizó en la necesidad de una ayuda gubernamental al sector privado. “Nosotros

“Tenemos que buscar medios para que las empresas en Chiloé -eso es muy necesario-, no solamente por dar trabajo, sino porque le dan crecimiento a la Isla, de que haya algún incentivo de parte del Gobierno”.

Iván Moreira, congresista por la Región de Los Lagos.

tenemos que buscar medios para que las empresas en Chiloé -eso es muy necesario-, no solamente por dar trabajo, sino porque le dan crecimiento a la Isla, de que haya algún incentivo de parte del Gobierno, de Economía, para generar mayor inversión”, concluyó el gremialista. ☺